REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SESENTA Y NUEVE CIVIL MUNICIPAL HOY CINCUENTA Y UNO DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidós (2022)

PROCESO	ACCION DE TUTELA
DEMANDANTE	MIGUEL ANTONIO PATAQUIVA MUÑOZ
DEMANDADOS	OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ ZONA CENTRO
RADICADO	11001 40 03 069 2022 00122 00

Agotado el trámite establecido por la Ley se procede a emitir fallo dentro de la acción de tutela de la referencia en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

El señor MIGUEL ANTONIO PATAQUIVA MUÑOZ solicita la protección de sus derechos fundamentales derecho de petición y derecho a la administración de justicia los cuales, afirma, le están siendo vulnerados OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ ZONA CENTRO.

Indica el actor que el 11 de marzo del año 2021, por intermedio de su apoderado, presentó derecho de petición a la accionada por medio del cual solicitó la inclusión del número de cédula de su padre LUIS FELIPE PATAQUIVA GRACIA en los folios de matrículas inmobiliarias 50C-1553005 y 50C-1550241, así como del acta de su defunción, sin que a la fecha de presentación de esta acción haya recibido respuesta.

Ante lo anotado solicita al Despacho la protección de sus derechos fundamentales y se ordene a la demandada proceda a dar respuesta a la petición presentada.

TRÁMITE

Mediante auto calendarado 9 de febrero del año que avanza se avocó conocimiento de la presente acción y se ordenó oficiar a la accionada quien dentro del término concedido contestó en los siguientes términos.

La Registradora Principal de la demandada pide se declare la nulidad de todo lo actuado teniendo en cuenta que esta instancia judicial carece de competencia para conocer de la acción por cuanto, de conformidad con el contenido del art. 13, numeral 4°, Decreto 2723 de 2014, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, no son entidades del orden municipal, sino nacional, ya que forman parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, y carecen de todo tipo de autonomía jurídica, administrativa y/o financiera respecto de la referida Superintendencia.

No obstante, informa que ya dio respuesta al derecho de petición e indica las razones legales por las cuales no puede acceder a la solicitud de inclusión del número de identificación y certificado de defunción del señor LUIS FELIPE PATAQUIVA GRACIA.

Ante lo informado por la Oficina demandada el Juzgado procedió a comunicarse con el accionante quien manifestó que si había recibido la respuesta por parte de la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS ZONA CENTRO.

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta la nulidad solicitada por la accionada, para decidir, se procede a establecer la competencia de este estrado judicial para conocer de la presente acción.

En situaciones como la aquí presentada la Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades entre ellas en el Auto 242 del 15 de mayo de 2019 en el que señaló que, conforme el Decreto 2591 de 1991 solamente existen 2 eventos procesales en los que procede el rechazo de una acción de tutela siendo estos: (i) la falta de corrección de la solicitud, en caso de que el juez la haya solicitado previamente si no es posible determinar cuáles son los hechos o razones que motivan la acción y (ii) la existencia de una actuación temeraria, que faculta al juez para negar o rechazar todas las acciones idénticas que se hayan presentado. Por consiguiente, cuando una autoridad judicial considere que carece de competencia por alguno de los factores previamente reseñados en esta providencia, deberá enviar el asunto al juez o corporación judicial que estime competente para resolver la solicitud de amparo y, en ningún caso, puede rechazar la acción de tutela por falta de competencia.

Así mismo ha señalado la Alta Corporación Constitucional que en materia de competencia para conocer de la acción de tutela que las reglas del reparto otorgó un alcance inexistente a las disposiciones allí contenidas pues *“...lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, se deben tener como de reparto y/o asignación de expedientes de tutela. Así, esta autoridad judicial, en el Auto expedido el 3 de abril de 2019, aplicó una disposición que no desplaza su competencia, por lo que desconoció los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la naturaleza misma de la acción de tutela, en cuanto mecanismo constitucional dirigido a la resolución inmediata de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante. Por lo tanto, la autoridad mencionada se encuentra en la obligación de resolver, en sede de instancia, la acción de tutela, por tratarse de la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó su conocimiento.”* (Auto 127 de 2015).

En Auto 127 de 2015 igualmente señaló la Alta Corporación Constitucional que: *“...la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2° C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem).”*

Como puede verse, es evidente que, acorde con el contenido del art. 86 de la C.P. y las diferentes decisiones de la Corte Constitucional, en casos como el que aquí se analiza, esta instancia judicial si es competente para conocer; razón por la cual se negará lo solicitado por la Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro.

Aclarada la competencia para conocer de esta acción Constitucional, entra el Despacho a decidir.

El artículo 86 de la Constitución Nacional establece que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Este mecanismo de orden residual, solamente encuentra procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por lo que, se pone al descubierto que la intención y espíritu del constituyente fue la de introducir una figura alterna o paralela a los juicios y a los procedimientos que constituyen vía común para hacer valer los derechos cuya función se encuentra genéricamente asignada a la administración de justicia y garantizada por la Carta Política.

Es necesario, por tanto, destacar como reiteradamente lo ha expuesto la Corte Constitucional, que, tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de los derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuida a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además, el peticionario debe tener un interés jurídico y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio especial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En lo que concierne al derecho de petición, el art. 23 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Dentro del abundante desarrollo jurisprudencial que ha tenido este derecho, se han decantado, en forma general, los siguientes requisitos y presupuestos:

“... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

Hechas las precisiones que preceden, entra el Despacho a resolver.

PROBLEMA JURÍDICO Y CASO CONCRETO

En el caso que hoy ocupa la atención del Juzgado el accionante persigue que se le dé respuesta al derecho de petición que presentó a la accionada el 11 de marzo de 2021 en el que solicitó la inclusión del nombre y cédula de su padre LUIS FELIPE PATAQUIVA GRACIA en los folios de matrículas inmobiliarias 50C-1553005 y 50C-1550241, así como del acta de su defunción.

La Registradora Principal de la OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ ZONA CENTRO en escrito enviado al Juzgado informa que el 9 de febrero de 2022 dio respuesta al actor en la que explicó las razones legales por las cuales no puede acceder a lo solicitado.

Ahora bien, al revisar la respuesta se encuentra que cumple con las condiciones establecidas por la Corte Constitucional pues, así no se haya accedido a lo pedido; guarda relación con lo solicitado. De igual manera, la misma fue recibida por el actor, como así lo confirmara en llamada hecha por el Juzgado.

Conforme a las situaciones arriba narradas es evidente que nos encontramos ante un hecho superado desde antes de presentarse esta acción Constitucional.

La Corte Constitucional en sentencia T-467 al respecto dijo:

“Así las cosas, la eficacia de la acción de tutela reside en el deber que tiene el juez, si encuentra vulnerado o amenazado el derecho alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento encaminada a la defensa actual y cierta del derecho en disputa.

Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la violación o amenaza ya ha sido superada, es decir, la pretensión instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el instrumento constitucional – acción de tutela– pierde eficacia y por tanto, su razón de ser. En estas condiciones la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener y el proceso carecería de objeto, resultando improcedente la tutela; efectivamente desaparece el supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución Política –la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”. (Subrayado fuera de texto).

De lo anterior se tiene que no hay actualmente vulneración al derecho pedido en amparo por lo cual se declarará la carencia actual de objeto en atención a que como instrumento constitucional de defensa de los derechos fundamentales que se dijo fueron conculcados perdió su razón de ser, resultando ineficaz, ante la inexistencia actual de omisión por parte de la accionada en tutela.

Por esta razón y en virtud que la potencial orden por vía de tutela recaería sobre el mismo pedimento que ya fue contestado y resuelto por la pasiva, no tiene sentido emitirla pues resultaría desde todo punto de vista inocua, en razón a que desaparecieron los hechos que originaron la acción impetrada.

Sin más consideraciones, el Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal, hoy Cincuenta y Uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá,

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la solicitud de nulidad presentada por la Registradora Principal de la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS ZONA CENTRO de esta ciudad, acorde con lo anotado en las consideraciones de esta decisión.

2. Declarar la carencia actual de objeto en el asunto de la referencia por existir hecho superado, con fundamento en las razones anotadas anteriormente.

3. ORDENAR que por secretaría se libren las comunicaciones a que se refiere el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. En la oportunidad legal correspondiente, por secretaria envíese el expediente a la ilustrada Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos del artículo 31 del decreto 2591 de 1991, en caso de no ser impugnada.

Notifíquese y cúmplase.